

## Resumen Ejecutivo del Caso

María Lourdes Afiuni era juez titular de un tribunal del área penal desde el año 2006.

El 10 de diciembre de 2009 acuerda sustituir la medida privativa de libertad que pesaba en contra de Eligio Cedeño, quien para la fecha había permanecido en prisión por 2 años y 10 meses, cuando la legislación venezolana establece un período de 2 años como tiempo máximo de detención. La juez basó su decisión en las normas procesales penales del país y en un informe emanado del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, referido a Cedeño.

Pocas horas después de haber acordado la medida sustitutiva, funcionarios de los Servicios Bolivarianos de Inteligencia (SEBIN) la detienen junto a todo el personal del tribunal, siendo liberados todos menos dos alguaciles y la juez.

Al día siguiente, el Presidente de la República, en cadena nacional de radio y televisión, califica a la juez de “bandida” y exige prisión de 30 años, la máxima pena que se impone en el país; en el acto se encontraban diversas personalidades, incluyendo a la Fiscal General de la República.

Dos días más tarde se acuerda proseguir el juicio en libertad de los alguaciles y se ratifica la detención de la juez, quien posteriormente es trasladada al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), cárcel de mujeres en la que también se encuentran varias reclusas que cumplen condenas por decisión de Afiuni. Igualmente su salud se ha visto afectada en varias ocasiones, sin que haya recibido debida y oportuna atención.

Desde su ingreso en el INOF, Afiuni ha sido objeto de diversas amenazas y conatos de atentados; reclusas condenadas de alta peligrosidad por homicidios múltiples y tráfico de drogas han sido colocadas como vecinas de celda, sin que se respete la clasificación entre procesados y sentenciados, ni entre reclusas de alta y baja peligrosidad.

Desde su ingreso en el INOF en diciembre de 2009, María Lourdes Afiuni se encuentra sometida a una situación diferente a la del resto de las reclusas: no recibe sol, no tiene acceso a las actividades culturales, se le niega el acceso a la capilla y a las actividades religiosas y sus visitas son severamente controladas, restringidas y, en ocasiones, prohibidas.

El 11 de enero de 2010, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a su favor, solicitando al Estado el respeto a las garantías del debido proceso y su traslado a un recinto en el que su vida e integridad estuviesen a salvo. Tres órganos de derechos humanos de la ONU se pronunciaron conjuntamente en torno a su caso, además de numerosas asociaciones y organizaciones internacionales no gubernamentales. Hasta el momento, el Estado ha hecho caso omiso a todos los llamamientos.

El proceso judicial en su contra ha estado lleno de irregularidades desde su inicio y la totalidad de los recursos judiciales presentados por sus abogados han sido desestimados. Uno de los recursos admitidos y posteriormente declarado sin lugar fue la recusación del segundo juez que ha conocido su causa, quien había expresado públicamente su fidelidad al “proceso” y a “mi comandante”, lo cual fue considerado por la defensa como “motivos graves que afectan su imparcialidad”, y quien además hizo un cambio de calificación jurídica de los delitos imputados a la Juez e incurrió en abuso contra detenido, siendo denunciado ante el Ministerio Público por violencia psicológica en contra de María Lourdes Afiuni, a pesar de todo lo cual la Corte de Apelaciones desestimó la recusación, ratificándolo como juez de la causa.